



Tribunal Administrativo de Norte de Santander

San José de Cúcuta, veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

M. P. Carlos Mario Peña Díaz

RADICADO: No. 54-001-33-33-002-2014-01270-01
ACCIONANTE: OLGA MORA
DEMANDADO: NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN –MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

1. Mediante escrito fechado 17 de octubre de 2017, el señor Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, manifiesta que se encuentra impedido para actuar como Procurador Judicial dentro del presente proceso por estar incurso dentro de las causales 2 de recusación del artículo 141 del Código General del Proceso, la cual sustenta en que conoció el proceso en primera instancia, profiriendo sentencia dentro del mismo en calidad de juez.
2. Analizada la causal esgrimida junto con los argumentos del impedimento manifestado, esta Sala de decisión lo considera fundado, toda vez, que según se observa a folio 141 a 146 del expediente, el ahora Procurador 24 Judicial II Administrativo de Cúcuta, profirió la sentencia objeto de alzada en condición de Juez Tercero Administrativo Oral de Cúcuta.
3. En razón de lo anterior, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor Rafael Eduardo Celis Celis, declarándolo separado del conocimiento del presente asunto, ante lo cual, se dispondrá su reemplazo por el señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, en virtud de lo normado en el artículo 134 del CPACA.
4. Una vez ejecutoriado el auto anterior, póngase en conocimiento de dicha decisión al señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, para que dentro de los diez (10) siguientes a la comunicación, presente los alegatos de conclusión si lo estima pertinente. Una vez cumplido lo anterior, pásese el expediente al despacho del Magistrado sustanciador para lo de su trámite.
5. En mérito de lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRESE FUNDADO el impedimento manifestado por el Doctor Rafael Eduardo Celis Celis, Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por tal motivo, se le declara separado del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: DISPONER su reemplazo por el señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, en virtud de lo normado en el artículo 134 del CPACA.

TERCERO: COMUNÍQUESE la presente decisión al señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, para que dentro de los diez (10) siguientes a la comunicación, presente los alegatos de conclusión si lo estima pertinente. Una vez cumplido lo anterior, pásese el expediente al despacho del Magistrado sustanciador para lo de su trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Discutido y aprobado en Sala de Decisión Oral N° 3 de 23 de noviembre de 2017)




CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ
Magistrado.-



ROBIEL AMED VARGAS GONZALEZ
Magistrado.-



HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado.-



X Estado
N° 201
Nov. 29/2017



Tribunal Administrativo de Norte de Santander

San José de Cúcuta, veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

M. P. Carlos Mario Peña Díaz

RADICADO: No. 54-001-33-33-002-2014-01478-01
ACCIONANTE: VIRGELMA PACHECO PALLARES
DEMANDADO: NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN –MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

1. Mediante escrito fechado 17 de octubre de 2017, el señor Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, manifiesta que se encuentra impedido para actuar como Procurador Judicial dentro del presente proceso por estar incurso dentro de las causales 2 de recusación del artículo 141 del Código General del Proceso, la cual sustenta en que conoció el proceso en primera instancia, profiriendo sentencia dentro del mismo en calidad de juez.

2. Analizada la causal esgrimida junto con los argumentos del impedimento manifestado, esta Sala de decisión lo considera fundado, toda vez, que según se observa a folio 126 a 132 del expediente, el ahora Procurador 24 Judicial II Administrativo de Cúcuta, profirió la sentencia objeto de alzada en condición de Juez Tercero Administrativo Oral de Cúcuta.

3. En razón de lo anterior, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor Rafael Eduardo Celis Celis, declarándolo separado del conocimiento del presente asunto, ante lo cual, se dispondrá su reemplazo por el señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, en virtud de lo normado en el artículo 134 del CPACA.

4. Una vez ejecutoriado el auto anterior, póngase en conocimiento de dicha decisión al señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, para que dentro de los diez (10) siguientes a la comunicación, presente los alegatos de conclusión si lo estima pertinente. Una vez cumplido lo anterior, pásese el expediente al despacho del Magistrado sustanciador para lo de su trámite.

5. En mérito de lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRESE FUNDADO el impedimento manifestado por el Doctor Rafael Eduardo Celis Celis, Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por tal motivo, se le declara separado del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: DISPONER su reemplazo por el señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, en virtud de lo normado en el artículo 134 del CPACA.


TERCERO: COMUNÍQUESE la presente decisión al señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, para que dentro de los diez (10) siguientes a la comunicación, presente los alegatos de conclusión si lo estima pertinente. Una vez cumplido lo anterior, pásese el expediente al despacho del Magistrado sustanciador para lo de su trámite.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Discutido y aprobado en Sala de Decisión Oral N° 3 de 23 de noviembre de 2017)


CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ
Magistrado.-


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
Magistrado.-


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado.-

 Estado
N° 201
Nov. 29/2017



Tribunal Administrativo de Norte de Santander

San José de Cúcuta, veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

M. P. Carlos Mario Peña Díaz

RADICADO: No. 54-001-33-33-002-2014-01277-01
ACCIONANTE: HENRY BLANCO BOTELLO
DEMANDADO: NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN –MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

1. Mediante escrito fechado 17 de octubre de 2017, el señor Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, manifiesta que se encuentra impedido para actuar como Procurador Judicial dentro del presente proceso por estar incurso dentro de las causales 2 de recusación del artículo 141 del Código General del Proceso, la cual sustenta en que conoció el proceso en primera instancia, profiriendo sentencia dentro del mismo en calidad de juez.
2. Analizada la causal esgrimida junto con los argumentos del impedimento manifestado, esta Sala de decisión lo considera fundado, toda vez, que según se observa a folio 156 a 161 del expediente, el ahora Procurador 24 Judicial II Administrativo de Cúcuta, profirió la sentencia objeto de alzada en condición de Juez Tercero Administrativo Oral de Cúcuta.
3. En razón de lo anterior, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor Rafael Eduardo Celis Celis, declarándolo separado del conocimiento del presente asunto, ante lo cual, se dispondrá su reemplazo por el señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, en virtud de lo normado en el artículo 134 del CPACA.
4. Una vez ejecutoriado el auto anterior, póngase en conocimiento de dicha decisión al señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, para que dentro de los diez (10) siguientes a la comunicación, presente los alegatos de conclusión si lo estima pertinente. Una vez cumplido lo anterior, pásese el expediente al despacho del Magistrado sustanciador para lo de su trámite.
5. En mérito de lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRESE FUNDADO el impedimento manifestado por el Doctor Rafael Eduardo Celis Celis, Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por tal motivo, se le declara separado del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: DISPONER su reemplazo por el señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, en virtud de lo normado en el artículo 134 del CPACA.

TERCERO: COMUNÍQUESE la presente decisión al señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, para que dentro de los diez (10) siguientes a la comunicación, presente los alegatos de conclusión si lo estima pertinente. Una vez cumplido lo anterior, pásese el expediente al despacho del Magistrado sustanciador para lo de su trámite.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Discutido y aprobado en Sala de Decisión Oral N° 3 de 23 de noviembre de 2017)


CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ
Magistrado.-


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
Magistrado.-


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado.-

 x Estado
N° 201
Nov. 29/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Magistrado ponente **CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ**

San José de Cúcuta, veintitrés (23) de Noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref. : Radicado : N° 54-001-33-33-**004-2016-00157-01**
 Acción : Nulidad y restablecimiento del Derecho
 Demandante : Ana Leticia Albarracín Balaguera
 Demandado : Municipio de Arboledas

En atención al informe secretarial que antecede (fl. 74), se procederá a resolver la apelación presentada por la apoderada de la parte demandante contra la decisión proferida en auto por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, mediante la cual se rechaza la demanda por caducidad del medio de control.

1.- EL AUTO APELADO

Se trata del auto proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta (fl. 58), por medio del cual se rechazó la demanda por caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para sustentar su decisión, el Juez A quo señaló que tal y como lo prevé el artículo 164 del CPACA, el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empieza a transcurrir a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo, en consecuencia se tiene dentro del sub examine que el acto administrativo materia de censura Resolución No. 007 del 06 de enero de 2016 fue notificado personalmente el 08 de enero de 2016, por lo que la parte accionante tenía hasta el 09 de mayo de 2016 para interponer el medio de control, no obstante la demandante, solo hasta el día 27 de mayo de 2016 presentó la solicitud de conciliación prejudicial, es decir esta solicitud fue incoada cuando ya se habían superado los 4 meses siguientes a la comunicación, notificación o publicación del acto de que trata la Ley 1437 de 2011.

Igualmente expresa que la revocatoria directa interpuesta por la demandante no suspende ni revive términos legales para demandar el acto administrativo ante la

jurisdicción contencioso administrativa, ya que se trata de un acto administrativo definitivo, por lo que el término para interponer la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento fenecía el día 09 de mayo de 2016.

2.- EL RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte demandante presenta recurso de apelación en contra de la decisión anterior, el cual sustenta así:

Aduce que el término de caducidad sólo puede contabilizarse a partir del momento en que la administración ha dado a conocer el acto administrativo, a través de su comunicación, notificación, ejecución o publicación a menos de que en la demanda se controvierta precisamente el procedimiento de notificación, caso en cual deberá tramitarse el proceso, para que en la sentencia se defina si la demanda se presentó de manera oportuna.

Que si bien es cierto que su poderdante tuvo conocimiento del acto administrativo de fecha 08 de enero del 2016 de manera irregular, estuvo siempre a la espera de su notificación y sus recursos para ejercer su derecho de contradicción y defensa, pero la administración nunca la efectuó, por ello manifiesta que hasta que no se efectuó la notificación del acto administrativo particular y concreto en forma legal, no produce efectos legales la decisión allí contenida, lo cual tiene como consecuencia que no quede en firme y no adquiera fuerza ejecutoria, es decir que no puede darse la connotación de conducta concluyente que el a-quo le da al caso en particular.

Por ultimo indica, que con respuesta del 16 de mayo de 2016 queda claro que la administración vulnera su derecho a ser debidamente notificada, por lo cual a partir del 17 de mayo del mismo año es que debe empezar a regir el cómputo de caducidad quedando en pleno derecho para ejercer la vía jurisdiccional.

Del rechazo de la demanda por caducidad del medio de control.

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tal y como se contempla en el literal d del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, deberá ser interpuesto dentro de los 4 meses siguientes a la comunicación,

Rad. : Nº 54-001-33-33-004-2016-00157-01
Accionante: Ana Leticia Albarracín Balaguera
Auto resuelve recurso de apelación

notificación o publicación del acto administrativo, al respecto debe precisarse que el acto administrativo se entiende notificado cuando la persona conoce de su contenido, encontrándose de esta forma consciente de la decisión contemplada en él.

Igualmente el Consejo de Estado se ha referido a la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del Derecho, estableciendo que su término empezará a correr y podrá contabilizarse a partir del momento en que la administración da a conocer el acto administrativo por medio de su notificación, comunicación, ejecución o publicación, en razón a ello en Sentencia de fecha 19 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, radicado No. 25000-23-41-000-2013-01801-01, se expresó lo siguiente:

“La caducidad ha sido entendida como el fenómeno jurídico procesal a través del cual “[...] el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la Jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del Juez, cuando se verifique su ocurrencia.”. Se trata de una garantía para la seguridad jurídica y el interés general, de manera que quien acuda a ejercer el derecho de acción tiene la carga procesal de hacerlo en los precisos términos establecidos por el legislador, so pena del rechazo de su demanda, o de una sentencia inhibitoria (...) De la norma transcrita se colige que el término de caducidad sólo puede contabilizarse a partir del momento en el que la Administración ha dado a conocer el acto, a través de su comunicación, notificación, ejecución o publicación. A menos de que en la demanda se controvierta, precisamente, el procedimiento de notificación, caso en el cual deberá tramitarse el proceso, para que en la sentencia se defina si la demanda se presentó de manera oportuna. En este último evento, ha señalado la Jurisprudencia de esta Corporación que es necesario que exista duda razonable frente a la caducidad de la acción.” (Subraya la Sala)

Del caso concreto

Por lo anterior, para el caso concreto se tiene que el acto administrativo Resolución N° 007 de 06 de enero de 2016, se entiende notificado a partir del día 08 de enero de 2016, momento en que la señora Albarracín Balaguera suscribe la comunicación de cuyo contenido se desprende la decisión de apartarla de su cargo al declararla insubsistente, como se desprende del oficio suscrito por ella visto a folio 38, desprendiéndose así igualmente de su escrito de demanda y del derecho de petición presentado ante el ente territorial con fecha 15 de abril de 2016, en donde manifiesta haberlo conocido mediante comunicación realizada por el Alcalde Municipal en la citada fecha.(fl. 1)

Ahora en lo que tiene que ver con el derecho de petición y el argumento planteado por la accionante de la suspensión del término de caducidad en razón de éste, debe precisarse que el mismo no suspende la caducidad del medio de control, como lo sostiene la parte demandante, debiéndose concluir que la accionante conocía el contenido de la decisión al momento de presentar la demanda y la solicitud de conciliación prejudicial.

Por lo tanto al contabilizar el termino de caducidad de 04 meses visto en el artículo 169 del CPACA, a partir del día 08 de enero de 2016, fecha en la que se insiste es claro que la actora tuvo conocimiento del acto administrativo que la declaró insubsistente en el cargo de Técnico Operativo, la demanda por nulidad y restablecimiento del derecho debió ser presentada a más tardar el día 09 de mayo de 2016, o en su defecto la solicitud de conciliación prejudicial para que interrumpiera la caducidad de la acción, términos establecidos por el ritual procesal administrativos con el fin de otorgar seguridad jurídica a las actuaciones de las administración en virtud del principio de legalidad que envuelve a las mismas.

Finalmente se destaca que para la Sala no hay duda respecto al proceso de notificación, que el mismo no se sometió a algún tipo de ritualismo, sin embargo el efecto de la actuación surtida por la administración de poner en conocimiento del actor el contenido de la decisión si fue agotado, de manera que no es de recibo alegar una falta de notificación transcurridos 3 meses desde que fue comunicada la decisión a la accionante. Tal y como lo indicó la jurisprudencia reseñada en líneas anteriores, proponer la falta de notificación del acto administrativo resultaría un

Rad. : N° 54-001-33-33-004-2016-00157-01
Accionante: Ana Leticia Albarracín Balaguera
Auto resuelve recurso de apelación

argumento para demandar la nulidad del acto administrativos, y examinar la caducidad en el ejercicio del medio de control siempre y cuando exista duda razonable respecto de la misma, escenario que no es el que se presenta en el asunto bajo examen.

Por lo expuesto, se confirmará lo resuelto por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta el 21 de Noviembre de 2016, referente a rechazar la demanda interpuesta por la señora Ana Leticia Albarracín por la caducidad del medio de control.

Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha 21 de Noviembre de 2016 emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta referente a rechazar la demanda interpuesta por la señora Ana Leticia Albarracín por la caducidad del medio de control.

SEGUNDO: En firme esta providencia, **devuélvase** el expediente al Juzgado de origen, previa las anotaciones secretariales de rigor.

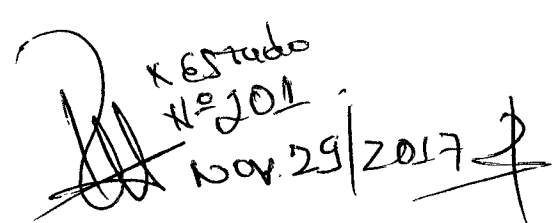
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Esta providencia fue discutida y aprobada en Sala de Decisión Oral N° 3 del 23 de Noviembre de 2017)


CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ
Magistrado


ROBIEL AMÉD VARGAS GONZÁLEZ
Magistrado


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado


X Estado
N° 201
Nov 29/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Magistrado Sustanciador Dr. Carlos Mario Peña Díaz

San José de Cúcuta, veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref.: Proceso Rad: 54-001-33-40-009-**2016-00636-01**
Acción : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**
Actor : Alberto Rodríguez Sánchez
Contra : Nación –Procuraduría General de la Nación

Visto el informe secretarial que antecede, procede la Sala a resolver el impedimento planteado por la Juez Noveno Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta, la cual a su vez, estima que el impedimento formulado comprende a todos los Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta.

I. ANTECEDENTES

1.1. El señor Alberto Rodríguez Sánchez, a través de apoderado(a) judicial, interpone demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Nación- Procuraduría General, a efectos de que se declare la nulidad del oficio SG. No. 005405 del 16 de octubre de 2015, mediante el cual se negó el reajuste de la remuneración del demandante en el desempeño del cargo Procurador 89 Judicial Penal II de la ciudad de Cúcuta, equivalente al 80% de lo devengado por todo concepto salariales al Magistrado por alta Corte y el pago de las correspondientes diferencias salariales desde el 9 de noviembre de 2011 y hasta el 26 de enero de 2012, de conformidad con las leyes 10 de 1987, 63 de 1988 y el Decreto 610 de 1998 y el artículo 208 de la Constitución Política.

1.2. El proceso le correspondió por reparto a la Juez Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, la cual mediante auto del 28 de septiembre de 2017, formuló impedimento para conocer del proceso y consideró que la causal de impedimento planteada, comprendía a todos los Jueces Administrativos Orales de Cúcuta, razón por la cual, remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que se decidiera el impedimento.

II. MANIFESTACIÓN DEL IMPEDIMENTO

2.1. La doctora Delewvsky Susan Yellyza Contreras, actuando en su condición de Jueza Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, mediante auto calendado 28 de septiembre de 2017, formula impedimento, señalando que concurre en la causal de recusación establecida en el numeral 1 del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión del artículo 130 de la ley 1437 del 2011, como quiera, que la controversia planteada podría favorecer sus intereses, habida consideración que como funcionario judicial, podría igualmente tener derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial que se solicita, al igual, que los intereses de los demás Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta.

III. CONSIDERACIONES

3.1. En el presente caso, la Juez Noveno Administrativo Mixto de del Circuito de Cúcuta manifiesta, que ella y los demás Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta, se encuentran incursos en la causal establecida en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece:

“1. Tener el Juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.”

3.2. Analizada la causal esgrimida junto con los argumentos del impedimento manifestado, esta Sala de decisión lo considera fundado, toda vez, que como bien lo afirma la Juez Noveno Administrativo Mixto de Cúcuta, tanto ella como los demás Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta poseen un interés en las resultados del caso objeto de controversia, toda vez que pueden eventualmente verse cobijados con el resultado del litigio planteado.

3.3. En razón de lo anterior, se declarará fundado el impedimento manifestado por los Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta, declarándolos separados del conocimiento del presente asunto. Lo anterior, en el entendido que este interés no se refiere al beneficio o perjuicio directo resultante del fallo que lo resuelva, sino que toca directamente el juicio de valor que se elabore para la solución del problema jurídico a que se contrae la demanda, de manera que aún en procesos diferentes,

Radicado: 54-001-33-40-009-2016-00636-01
Auto Resuelve impedimento

a unas mismas razones corresponderían unas mismas soluciones, que condicionan la independencia para decidir.

3.4. Además de lo anterior, en aplicación a lo previsto en el numeral 2º del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, se ordenará la remisión del expediente al Presidente de este Tribunal, a efectos de que se fije fecha y hora para efectuar el sorteo de un conjuer que asuma el conocimiento del presente asunto.

3.5. En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión Oral N° 03 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,


RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRESE FUNDADO el impedimento manifestado por los Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta. Por tal motivo, se les declara separados del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: En consecuencia, una vez ejecutoriado el presente proveído, **remítase** el expediente al Presidente de este Tribunal, **a efectos de que señale fecha y hora para efectuar el sorteo de un conjuer que asuma el conocimiento del presente asunto.**


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

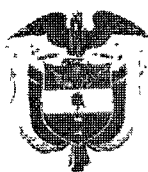
(Discutido y aprobado en Sala de Decisión Oral N° 3 del 23 de noviembre de 2017)


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
Magistrado.-


CARLOS MARÍA PEÑA DÍAZ
Magistrado.-


HERNANDO AYALA PENARANDA
Magistrado.-

 X Estado
N° 201
Nov. 29/2017



Tribunal Administrativo de Norte de Santander

San José de Cúcuta, veintitrés (23) de Noviembre de dos mil diecisiete (2017)

Magistrado Ponente: Carlos Mario Peña Díaz

RADICADO: No. 54-001-33-40-010-2016-00112-01
DEMANDANTE: JESUSA CARVAJAL MARÍN
DEMANDADO: NACIÓN- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Procede la Sala a resolver de plano, el recurso de apelación interpuesto mediante escrito por la parte demandante, en contra de la providencia de fecha 19 de enero de 2017 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, por medio del cual resolvió decretar el desistimiento tácito del medio de control de Nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la apoderada judicial de la señora Jesusa Carvajal Marín, teniendo en cuenta como sustento las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES

1.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del CPACA, la señora Jesusa Carvajal Marín por conducto de abogado en ejercicio, formuló demanda contra la Nación – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, solicitando la nulidad del acto administrativo No. S-2015-254010-5400 del 07 de julio de 2015, por medio el cual se da respuesta al derecho de petición con radicado No. 000165; 000166, y del acto administrativo N° E-2015-263771-5400 del 12 de junio de 2015, por medio del cual se resuelve que no existe vínculo laboral entre la demandante y el ICBF y como consecuencia de lo anterior, solicita que se declare la existencia de un contrato realidad entre la demandante y el ICBF.

1.2. La demanda fue admitida por el *a quo* mediante auto calendarado 26 de Abril de 2016¹, a través del cual el Juez de conocimiento ordenó a la parte actora pagar la suma de sesenta mil pesos (\$60.000) como gastos ordinarios del proceso conforme con lo descrito en el numeral 4° del artículo 171 del CPACA; a continuación, el auto fue comunicado a las partes el 27 de abril del 2016 (fl. 53) y notificado vía correo electrónico el mismo día (fl. 54).

1.3. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, profiere auto de fecha 01 de diciembre de 2016², requiriendo a la parte demandante para que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mismo procediera a realizar la consignación de la suma fijada por el Despacho por concepto de gastos ordinarios, so pena de dar por terminado el presente proceso.

1.4. Con providencia de fecha 19 de enero de 2017, el A-quo decreta el desistimiento tácito del medio de control, por no haberse acreditado el pago de los gastos procesales. (Fl. 59 del expediente).

II. LA PROVIDENCIA APELADA

2.1. Fue proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, mediante auto que da por terminado el proceso de fecha diecinueve (19) de enero de 2017, en el que se resuelve decretar el desistimiento tácito del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la señora Jesusa Carvajal Marín contra la Nación-ICBF.

2.2. En efecto, el *a quo* dio por terminado el proceso archivando el expediente, argumentando que, según lo ha señalado la Corte Constitucional el desistimiento tácito es una figura de terminación anormal del proceso que se da cuando la parte que lo promueve no cumple con la carga procesal que le corresponde, dicha figura se encuentra estipulada en el artículo 178 de la Ley 1437 de 2011, estableciendo que el Juez transcurridos 30 días sin que la parte haya cumplido con la carga procesal ordenará a la misma mediante auto que lo cumpla dentro de los 15 días siguientes, so pena de la terminación del proceso o actuación correspondiente, por lo cual expresa, que dado que en el presente caso transcurrieron más de los 15 días previstos en la norma citada, sin que la parte demandante hubiere cumplido con

¹ Folio 53 del expediente.

² Folio 57

dicha obligación, es decir proveer lo necesario para surtir los gastos ordinarios del proceso, tal medida será decretada de oficio.

2.3. El día 25 de enero de 2017, la apoderada judicial de la parte demandante, interpone recurso de apelación³, en contra del auto calendado 19 de enero de 2017, donde se decretó el desistimiento tácito del proceso de la referencia, argumentado que el día 24 de enero de 2017 se realizó el pago de los gastos procesales decretados por el A-quo. Anexa Soporte del depósito judicial por el valor de los gastos del proceso visto a folio 62 del expediente.

III. RAZONES DE LA APELACIÓN

3.1. Mediante escrito, la apoderada judicial de la parte demandante, interpone recurso de apelación en contra de la providencia, argumentando que por error involuntario se omitió el pago de los gastos procesales decretados por el A-quo, debido al gran cúmulo de procesos adelantados a su nombre ante el Juzgado de instancia, no obstante indica que el pago ya fue realizado allegando el respectivo soporte del depósito judicial por el valor de los gastos del proceso.

Para resolver se,

IV. CONSIDERA

4.1. Primigeniamente, debe advertir la Sala, que es procedente el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, pues se trata de un auto consagrado en el numeral 3 del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formulado dentro de la oportunidad prevista en el numeral 2 del artículo 244 del CPACA; además, es éste Despacho el competente para decidir de plano sobre el recurso interpuesto, en anuencia de lo dispuesto por el artículo 125, artículo 243 en concordancia con el numeral 4 del artículo 171 del CPACA.

4.2. El tema planteado en el asunto que ocupa la atención de la Sala, se contrae a establecer si se ajusta a la legalidad, el auto proferido por el Juzgado Decimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, mediante el cual decretó el desistimiento tácito en el proceso y el archivo del expediente.

³ Folio 61 del expediente.

4.3. Frente a la figura del desistimiento tácito, el H. Consejo de Estado⁴ ha manifestado, que si el demandante realiza el pago de los gastos procesales fijados por el A-quo aun después de vencido el término, estos se tendrán como válidos, en consecuencia se precisa:

"En todo caso, debe precisarse que el término previsto en el numeral cuarto del artículo 207 del Decreto 01 de 1984 es perentorio, no preclusivo. De modo que así esté vencido el plazo para acreditar el pago de los gastos procesales, el demandante puede pagarlos y ese pago se entiende válido y eficaz."

"El vencimiento del plazo perentorio puede implicar la mora en el trámite del proceso por la inactividad del demandante, pero no trae como consecuencia la pérdida del derecho de impulsar el proceso con el pago de los gastos procesales."

Adicionalmente, para que opere el desistimiento tácito de la demanda se requiere de una declaración judicial, pues se trata de una forma de terminación anormal del proceso, si se tiene en cuenta que implica la renuncia del derecho". (Subraya y resalta la Sala)

4.4. Esa misma Corporación⁵ ha indicado:

"Se advierte que la parte demandante, mediante memorial de 25 de mayo de 2012 (y con el escrito de sustentación del recurso de apelación), allegó el recibo de la consignación realizada ese mismo día en el Banco Agrario de Colombia, a nombre del Tribunal Administrativo del Valle, por el valor de \$80.000 (folios 71 y 72, del cuaderno principal). En consecuencia y como quiera que la parte demandante consignó la suma fijada para los gastos ordinarios del proceso antes de que se notificara el auto que decretó el desistimiento de la demanda (lo cual ocurrió el 31 de mayo de 2012), dejando claro su interés en continuar con el trámite de la demanda, con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia se revocará el auto recurrido y, en su lugar, se ordenará la continuación del proceso en la etapa que corresponda"

4.5. Ahora bien, aunado a la anterior providencia citada, debe precisarse que en procura de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, el Estado debe facilitar las condiciones para que cualquier persona pueda ser parte en un proceso, por esto la H. Corte Constitucional⁶ ha señalado que:

"El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder

⁴ Consejo de Estado, Sección Cuarta, de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013), Expediente N°. 2500023270002012 00222 01 (19671), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, de fecha trece (13) de febrero de dos mil trece (2013), Radicación número 76001-23-31-000-2010-01942-01(45363), C.P. Jorge Enrique Vásquez Uribe.

⁶ Corte Constitucional, Sentencia T-283-13, de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013), M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo. En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos. Con base en esta clasificación, a continuación se determinará el contenido del derecho fundamental a la administración de justicia. **En primer lugar, la obligación de respetar el derecho a la administración de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización.** Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el género, la nacionalidad y la casta. En segundo lugar, la obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del derecho. En tercer lugar, **la obligación de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho. Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones**". (Subraya y resalta la Sala).

4.6. De acuerdo con el precedente jurisprudencial citado, es claro que en procura de asegurar el acceso a la administración justicia, resulta procedente revocar el auto que decreta el desistimiento tácito, cuando se acredite el pago de los mismos hasta antes de que cobre ejecutoria dicha decisión.

4.7. Así las cosas, revisada la demanda de la referencia, se observa que el hecho generador de la declaratoria de desistimiento tácito desapareció con la acreditación del pago de las expensas procesales (fl. 62), es decir con el pago de la suma de \$60.000 que el A-quo fijó en el numeral 4° en el auto de admisión de la demanda visto a folio 53, así pues demostrado el interés de continuar con el trámite del proceso por la parte demandante es claro que el mismo debe seguir con su normal curso.

4.8. En esta medida, la Sala revocará la providencia dictada por la Juez Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta de fecha 19 de enero de 2017, conforme se expone en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCASE la providencia de fecha diecinueve (19) de enero de 2017, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta y en su

lugar, **ORDENASE** que continúe con el trámite del proceso, conforme con los motivos expuestos en esta providencia

SEGUNDO: Una vez en firme el presente proveído, vuelva el proceso al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Esta decisión fue discutida y aprobada en sala de decisión No. 3 del 23 de noviembre de 2017)


CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ

Magistrado.-


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ

Magistrado.-


HERNANDO AYALA PEÑARANDA

Magistrado.

+ Estado

Nº 201

Nov. 29/2017